



Libertad de expresión en Venezuela

2012-2015

Catorce años de ejercicio hacen del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) una referencia nacional e internacional en la promoción del ejercicio independiente, plural y de calidad del periodismo en el país. Sustentado en los estándares nacionales e internacionales, su trabajo se enfoca en el monitoreo e investigación de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, labor que se afianza en un sistemático seguimiento en 17 regiones, a través de su red de corresponsales, con una cobertura de 71% del territorio nacional.

**Informe para
Examen
Periódico
Universal,
Venezuela
2016**

Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela)

1. Catorce años de ejercicio hacen del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) una referencia nacional e internacional en la promoción del ejercicio independiente, plural y de calidad del periodismo en el país. Sustentado en los estándares nacionales e internacionales, su trabajo se enfoca en el monitoreo e investigación de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, labor que se afianza en un sistemático seguimiento en 17 regiones, a través de su red de corresponsales, con una cobertura de 71% del territorio nacional. En Venezuela esta organización pertenece a las coaliciones Sinergia¹ y Proacceso², dedicadas al fortalecimiento de la sociedad civil y la defensa del derecho al acceso a la información pública, respectivamente. Formamos parte de IFEX (la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión), que agrupa a 90 organizaciones a nivel mundial³. En esta plataforma, actualmente, formamos parte del equipo coordinador de América Latina.

Resumen

2. Venezuela cuenta con principios constitucionales sólidos en materia de libertad de expresión. Sin embargo, el diagnóstico que ha realizado IPYS Venezuela evidencia que en los últimos 4 años se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la opinión libre y al acceso a la información pública.
3. El período 2012-2015 ha sido los mayores registros históricos de violaciones, con un aumento de las agresiones, ataques, medidas de censura, ocultamiento de cifras oficiales, y el abuso de poder por parte de las autoridades estatales para restringir el derecho a la información de los ciudadanos. Estas condiciones adversas pudieron haberse evitado si Venezuela hubiese aceptado e implementado las observaciones que recibió durante la primera ronda del Examen Periódico Universal, en 2011 y 2012.
4. Por esta razón, creemos que es indispensable que el Estado venezolano se aboque a: 1) Honrar y respetar las obligaciones asumidas por el Estado venezolano, en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública; 2) Propiciar y aceptar la visita oficial a Venezuela de los relatores para la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y atención a defensores de DDHH; 3) Establecer un programa nacional de protección para periodistas; 4) Promover una política pública en la que se garantice Internet como derecho humano para todos los ciudadanos; 5) Establecer mecanismos claros y eficientes para garantizar el acceso a la información pública, tanto en instituciones estatales y no estatales; 6) Garantizar la autonomía y la independencia de la autoridad encargada de establecer y ejecutar las políticas públicas de telecomunicaciones en el país.

Balance general

5. En el marco del EPU Venezuela 2016, IPYS Venezuela presenta un balance de la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información, desde la perspectiva del ejercicio del periodismo en el país, entre los años 2012 y 2015. Este informe se sustenta en monitoreo continuo, la sistematización de los datos históricos, así como en las investigaciones a profundidad que ha realizado esta organización a lo largo de este periodo. Como parte de las acciones de seguimiento, IPYS Venezuela construyó un registro especial que se fundamenta en los casos registrados en este lapso y las variables que corresponden a las

¹ Ver: <http://sinergia.org.ve/>

² Ver: <http://proacceso.org.ve/>

³ Ver: <http://www.ifex.org/>

recomendaciones que surgieron en el EPU Venezuela 2011 y que fueron desconocidas por el Estado venezolano.

6. El país garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en la Constitución Nacional, garantías que además son cónsonas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos y ratificados por Venezuela. Pese a ello, estas garantías se han debilitado. Se han impuesto las órdenes de silencio y el abuso de las autoridades estatales para restringir un proceso de comunicación libre, plural e independiente, como mecanismo necesario para el fortalecimiento democrático.
7. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, IPYS Venezuela registró 1210 casos que implicaron 2032 violaciones a libertad de expresión y el acceso a la información pública. Estas restricciones no son fortuitas, pues coinciden con las 13 recomendaciones que recibió Venezuela de parte de diferentes Estados en el marco del Examen Periódico Universal que presentó en 2011, y que fueron rechazadas o anotadas por el Estado en ese momento⁴. De igual manera, no se han honrado los compromisos en esta materia, que asumió Venezuela en 2015 durante las evaluaciones que presentó ante el Comité de Derechos Humanos⁵ y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁶.
8. Estas tendencias, además, forman parte de la sistematización de las categorías de investigación que trabaja esta organización⁷. En este lapso, los casos más frecuentes fueron por agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación, que sumaron 844 (42%) violaciones. También ocurrieron 505 (25%) abusos de poder estatal en materia de comunicación; 304 (15%) restricciones al acceso a la información pública; 191 casos (9%) de censura, estas acciones de silenciamiento provinieron de los poderes públicos, los grupos fácticos que actúan al margen de la ley, y de los propios medios de comunicación⁸.
9. En 185 oportunidades (9%) se utilizó el marco legal y judicial para condenar y amedrentar a periodistas, medios de comunicación, defensores de DDHH y ciudadanos por ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información. Hubo 3 casos de impunidad, en los que altas autoridades estatales justificaron las violaciones a la libertad de expresión, así como la actuación discrecional nivel judicial y policial, que convalidaron la actuación violenta en contra de periodistas y medios de comunicación.
10. En este período, los conflictos en materia de libertad de expresión se distribuyeron, con mayor o menor intensidad, a lo largo del territorio nacional. Hubo 70 acciones que afectaron el espectro de Internet y otras tuvieron un alcance nacional.
11. Los casos de violaciones a la libertad de expresión fueron predominantes en los principales estados, que contemplan la mayor cantidad poblacional del país, una alta concentración urbana y cuentan con un ecosistema de medios de comunicación diverso, en cuanto a sus plataformas: prensa, radio, televisión y medios electrónicos.
12. Según los datos de IPYS Venezuela, 44% de los casos –es decir 552 de los 1210 incidentes– ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas, la capital del país. En esta jurisdicción los gobiernos regionales y locales representan a los polos políticos del oficialismo y la oposición. A esta región le siguieron los estados Barinas (70 casos); Zulia (62); Bolívar (58), Carabobo (52); Táchira (51); Aragua (49); Monagas (46)⁹. Justamente, estas 7 regiones son gobernadas por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente en

⁴ Las 13 recomendaciones que recibió y anotó Venezuela, en materia de libertad de expresión fueron realizadas por: Australia, Alemania, Canadá, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Indonesia, Israel, Noruega y Suiza. A/HRC/19/12/Párr.96.1; 95.15; 96.3; 96.4;96.5; 96.8; 96.27; 96.28; 96.29; 96.30; 96.31; 96.32.

⁵CCPR/C/VEN/CO/4/Párr.19 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fVEN%2fCO%2f4&Lang=es

⁶CESCR/C/VEN/CO/3/Párr.13;31 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fVEN%2fCO%2f3&Lang=es

⁷ Ver: www.ipysvenezuela.org

⁸ Ver: Anexo 1

⁹ El período evaluado, 2012-2015, justamente corresponde al mayor lapso de gestión de los gobiernos regionales, que fueron electos en diciembre de 2012.

el gobierno; y al menos 4 de estas entidades son administradas por gobernantes que tuvieron una formación militar¹⁰. En 2015, en algunos municipios de los estados Zulia y Táchira se establecieron Estados de excepción que restringieron las garantías fundamentales de los ciudadanos de estas zonas fronterizas, que colidan con Colombia y Brasil. De alguna manera, esta situación elevó los riesgos para el ejercicio del periodismo y acentuó las condiciones de censura y autocensura en estas tres regiones.

13. Entre 2012 y 2015, los meses de mayores registros de violaciones a la libertad de expresión coincidieron con procesos electorales -de carácter nacional- y con protestas sociopolíticas que se extendieron en distintos estados del país. Es estos momentos aumentaron los riesgos y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, principalmente, por la cobertura informativa de calle.
14. Precisamente, hubo una intensificación de violaciones a la libertad de expresión en: octubre de 2012, cuando ganó la Presidencia Hugo Chávez; en abril de 2013, cuando fue electo Presidente Nicolás Maduro y ocurrieron protestas por motivaciones políticas; en febrero de 2014, cuando se registraron protestas por razones sociopolíticas en distintos estados del país; y en junio y diciembre de 2015, cuando se realizaron los comicios internos del partido del gobierno y las elecciones parlamentarias -en las que el bloque de oposición obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional-¹¹.
15. Según este registro, los actores estatales acumularon una responsabilidad directa en al menos 68% de los 1210 casos contabilizados entre 2012 y 2015. En ellos, hubo una actuación discrecional, de incumplimiento de las obligaciones internacionales de libertad de expresión, principalmente de parte de las autoridades del gobierno nacional, regional y local, de diversas tendencias político-partidistas. Los cuerpos de seguridad del Estado destacaron como los principales responsables. Las prácticas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias, las acciones de seguimiento y vigilancia policial, y los procesos de interceptación arbitraria de las comunicaciones privadas. Entre los principales victimarios, en este lapso, también aparecieron representantes de los ministerios, las dependencias ejecutivas, las gobernaciones, la Presidencia de la República, y los representantes del poder legislativo nacional.
16. IPYS Venezuela registró que las violaciones de la libertad de expresión más frecuentes fueron dirigidas contra equipos reporteriles, durante las coberturas de calles. Los más afectados fueron reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Esto ocurrió ante la ausencia de una política y programa nacional de protección de periodistas que garantice la salvaguarda de los periodistas durante su labor informativa.

Criminalización de activistas de DDHH

17. En segundo nivel, aparecieron las acciones de hostigamiento y atentados contra la integridad física de activistas de derechos humanos. Al igual que contra periodistas y representantes de medios de comunicación, contra los defensores de derechos humanos se registraron amenazas, detenciones arbitrarias y acciones de hostigamiento, a lo largo de estos 48 meses. Las violaciones más frecuentes contra este sector fueron las campañas de criminalización, que se intensificaron entre los años 2014 y 2015. Bajo este patrón prevalecieron las declaraciones agraviantes de autoridades públicas y la utilización sistemática de los medios estatal para estos fines. Uno de los espacios más utilizados para estas acciones fue el programa *Con el mazo dando*, conducido por Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional y actual diputado del parlamento, quien desde febrero de 2014 ha mantenido una práctica de criminalización a través de reportes de “patriotas cooperantes”, que bajo patrones de vigilancia y seguimiento policial, violan la privacidad y la reputación de periodistas, dirigentes políticos y activistas de

¹⁰ Los gobernadores con formación militar y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela son: Francisco Rangel Gómez (Bolívar); José Gregorio Vielma Mora (Táchira); Francisco Arias Cárdenas (Zulia); y Francisco Ameliach (Carabobo).

¹¹ Ver Anexo 2

DDHH. Para ello, ha utilizado los recursos y los espacios de Venezolana de Televisión, el principal canal del Estado venezolano.

18. Este diputado, al igual que altos funcionarios del gobierno -entre los que también está el Presidente de la República- han utilizado el espectro radioeléctrico para criminalizar a representantes de otros sectores de la sociedad. Uno de los más afectados han sido los empresarios y líderes gremiales, a quienes se les ha responsabilizado, de manera discrecional, de ser responsables de la “guerra económica”, de alimentos y de salud en país. Esta situación ha derivado en el hostigamiento de las fuentes de información, pues sobre ellos se han ejercido presiones oficiales luego de declarar a medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que genera una situación de autocensura no solo los periodistas sino en los ciudadanos que llevan la vocería de distintos sectores de la sociedad. Se registraron, entre 2014 y 2015, al menos 6 detenciones de ciudadanos del sector empresarial por declarar a los medios de comunicación¹².

Condenas por difamación e injuria

19. Los procedimientos administrativos y judiciales fueron frecuentes en la actuación del Estado en materia de libertad de expresión entre 2013 y 2015, justamente durante el periodo presidencial de Nicolás Maduro. En este tiempo, se utilizaron averiguaciones por parte de las instancias tributarias, el ente regulador de las telecomunicaciones, así como las demandas ante tribunales como un mecanismo de hostigamiento y de silenciar voces críticas del periodismo.
20. En este tiempo, IPYS Venezuela documentó 25 procedimientos judiciales por razones informativas y de opinión, hechos que son contrarios a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y las disposiciones de la Constitución Nacional. Al menos 13 de ellos correspondieron a demandas por los delitos de difamación e injuria¹³.
21. Una de las demandas por estos delitos fue ejercida y admitida por los tribunales regionales en el año 2013. El 10 de marzo de 2016, a través de un juicio que duró 20 horas y culminó de madrugada, fue condenado David Natera, el director del Correo del Caroní -un periódico privado con línea crítica del estado Bolívar. La sentencia implica 4 años de prisión, la prohibición de salida del país y un régimen de presentación mensual ante los tribunales, luego de realizar una investigación periodística en torno al caso de corrupción en Ferrominera del Orinoco, unas las principales industrias básicas del país¹⁴. A este medio se le sancionó con una sanción económica y se podría activar una demanda civil, que de ser admitida por la justicia venezolana puede llevar a la quiebra a este medio de comunicación.
22. Otro caso emblemático ha sido la querrela privada interpuesta, en abril de 2015, por Diosdado Cabello en contra de 22 directivos y miembros de los consejos editoriales de los periódicos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla. Esto ocurrió por la reproducción, de un reportaje que escribió un periodista del ABC de España, en el que se revelaba información de investigaciones internacionales que podrían vincular a Diosdado Cabello con irregularidad de narcotráfico¹⁵.
23. Entre 2002 y 2015, IPYS Venezuela contabilizó un total de 29 procedimientos judiciales por los delitos de difamación e injuria que han afectado a 39 personas, y que han sido ejercidos, en su mayoría, por representantes de los poderes públicos.

Árbitro parcializado

¹² Documentación realizada por Fedecámaras

¹³ Los delitos penales por difamación e injuria están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal Venezolano

¹⁴ Ver: <http://ipysvenezuela.org/alerta/bolivar-la-censura-tiene-un-aval-judicial-en-la-sentencia-contral-el-correo-del-caroni/>

¹⁵ Ver: <http://ipysvenezuela.org/wp-content/uploads/2015/10/MD-El-aparato-judicial-castiga-las-denuncias-de-corrupcion.pdf>

24. En este período, 5 emisoras de radio salieron del aire por orden del gobierno, y por la aplicación de disposiciones arbitrarias de la legislación nacional en materia de telecomunicaciones. Estas coerciones fueron constantes entre 2012 y 2015, cuando IPYS Venezuela registró 31 procedimientos administrativos que afectaron la libertad e independencia de los medios radioeléctricos privados y comunitarios, entre los que están portales web y proveedores de Internet y TV por suscripción y que fueron aplicados de manera discrecional por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Estas han sido investigaciones por supuestos delitos técnicos y de contenido¹⁶ que derivan en presiones que logran surtir un efecto de inhibición para los medios de comunicación, periodistas y los proveedores, que ante las amenazas prefieren evitar difundir información de manera pertinente y oportuna sobre los hechos que son de interés público, por miedo a ser sancionados por los órganos gubernamentales de las telecomunicaciones del país.
25. Un caso emblemático del manejo irregular de las licencias para operar y la asignación de las concesiones, proceso que está centralizado en el gobierno, ha sido el de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los principales canales de señal abierta que salió del aire en 2007 por orden del ex presidente Hugo Chávez, y fue una decisión convalidada por Conatel y el sistema de justicia venezolano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo, en 2015, sobre este caso y ordenó al Estado venezolano reparar los daños financieros y de equipamientos, así como abrir un proceso de licitación en igualdad de condiciones para asignar de manera transparente la concesión para operar la señal del canal 2. Sin embargo esta medida ha sido desconocida por parte del gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia declaró que esta sentencia, de carácter vinculante, era “inejecutable”¹⁷.

Monopolio estatal

26. Otras de las presiones que han afectado la libertad de expresión está relacionada con los precariedades para la compra de insumos de papel prensa y productos para la impresión. Por esta situación han pasado medios con distintas tendencias en su línea editorial: críticos, equilibrados y prooficialistas. Al menos 45 medios de 10 estados del país, han tenido dificultades de este tipo y han limitado su trabajo informativo, entre agosto de 2013 y marzo de 2016. Esto ha derivado en el cese de operaciones de algunos de ellos. Al menos 17 medios han salido de circulación de manera temporal o definitiva por esta situación. Al mes de marzo de 2016 -fecha en la que se redacta este informe- 10 se encuentran fuera de circulación. Esta situación derivó de la agudización de los controles cambiarios que impuso el gobierno para la importación del papel prensa y la posterior consolidación de un monopolio estatal, a través de la Complejo Editorial Alfredo Maneiro, corporación que depende del gobierno central, y es la única instancia autorizada para la importación, distribución y venta de este insumo en el país. Esto ha ocurrido así pese a que la Constitución Nacional prohíbe la consolidación de monopolios y los estándares internacionales de libertad de expresión rechazan estas prácticas para limitar el derecho a la información¹⁸.

Recomendaciones

27. Desde IPYS Venezuela consideramos que las observaciones que recibió Venezuela en el marco de la primera ronda del Examen Periódico Universal siguen siendo urgentes para Venezuela y por ello insistimos en que sean reconsideradas y asumidas por parte del Estado venezolano.

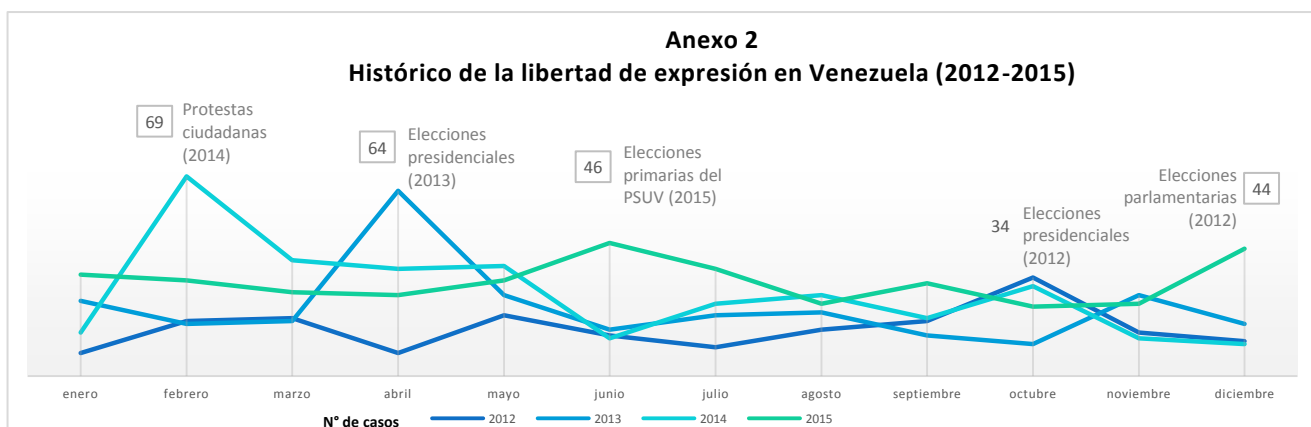
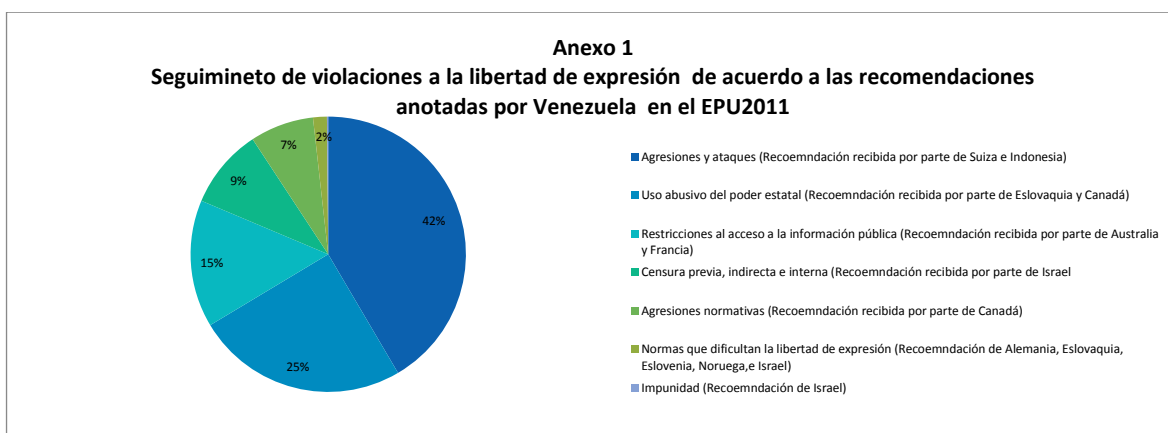
¹⁶ Las averiguaciones a medios audiovisuales y los excesivos controles sobre los que informó el Estado venezolano al Comité de Derechos Humanos violan las disposiciones de libertad de expresión que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Párrafos 245 y 251, Respuestas el Estado al Comité de Derechos Humanos. Párrafo 244. Lista de cuestiones relativa al cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela. Comité de Derechos Humanos

¹⁷ Ver: <http://ipysvenezuela.org/alerta/nacional-tsj-declaro-inejecutable-fallo-de-la-corte-idh-sobre-caso-rctv/>

¹⁸ <http://ipysvenezuela.org/alerta/carabobo-crisis-de-papel-acaba-con-82-anos-de-historias-impresas/>

28. A partir de los resultados de la evaluación anterior, planteamos 11 recomendaciones que consideramos que son inminentes para garantizar y fomentar el respeto a la libertad de expresión, como condición fundamental para el ejercicio democrático. La implementación de estas sugerencias podría ser el pilar esencial para garantizar las libertades ciudadanas en Venezuela, en los próximos 4 años.
29. **1.-Honrar y respetar las obligaciones asumidas por el Estado venezolano, en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.** Hacer cumplir los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los compromisos asumidos ante el Comité de Derechos Humanos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
30. **2.-Propiciar y aceptar la visita oficial a Venezuela de los relatores para la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y atención a defensores de DDHH.** A fin de evaluar la situación de la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del en derechos humanos.
31. **3.-Establecer una política pública orientada a garantizar, en su máxima expresión, la pluralidad y la diversidad informativa, tanto para los medios de comunicación como para los periodistas.** Es urgente salvaguardar el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna y que puedan tomar decisiones responsables, que fomenten la democracia.
32. **4.-Establecer un programa nacional de protección para periodistas, con la finalidad de combatir la cultura de impunidad en casos de violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y las libertades de opinión y disenso.** Es necesario que el Estado genere planes y programas para prevenir y atender ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como regular el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas que ponen en riesgo la vida e integridad de periodistas e infoc Ciudadanos.
33. **5.-Generar un programa de formación y seguimiento a la labor de funcionarios públicos a fin de que mantengan y promuevan un discurso de respeto y promoción de la libertad de expresión.** Es indispensable erradicar el discurso violento que se ha impuesto en Venezuela y prohibir las declaraciones agraviantes y el fomento del discurso de odio por parte de funcionarios públicos que ponen en riesgo la labor periodistas, activistas de derechos humanos.
34. **6.-Promover una política pública en la que se garantice Internet como derecho humano, para todos los ciudadanos.** Esta garantía puede establecer un mecanismo fundamental para la exigencia y salvaguarda de otros principios fundamentales, así como para el fortalecimiento de las nuevas tecnologías, la educación y la cultura.
35. **7.-Establecer los mecanismos de justicia, eficientes y necesarios, para sancionar los casos de represalias por disenso, los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas.** Para ello es indispensable prohibir el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, el abuso de fuerza por actores no estatales que ponen en riesgo la labor informativa y de expresión que realizan periodistas y ciudadanos.
36. **8.-Establecer mecanismos claros y eficientes para garantizar el acceso a la información pública, tanto en instituciones estatales y no estatales.** Es fundamental la aprobación de una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, así como la creación de un Instituto Autónomo que se encargue de establecer las condiciones necesarias para que la ciudadanía tenga derecho a saber sobre todos los asuntos que son de interés público.
37. **9.-Garantizar la autonomía y la independencia de la autoridad encargada de establecer y ejecutar las políticas públicas de telecomunicaciones en el país.** Esto permitirá para garantizar la libertad y la igualdad de condiciones para todos los medios radioeléctricos, y de esta manera prohibir las acciones que derivan en censura.

38. **10.-Establecer una política pública que garantice las condiciones óptimas para otorgar las frecuencias en materia de telecomunicaciones, de manera transparente e independiente.** Para ello, es necesario establecer mecanismos gubernamentales y judiciales justos, que propicien procedimientos abiertos, independientes y transparentes, para los permisos que necesitan los medios radioeléctricos, sin discriminación de sus líneas editoriales.
39. **11.-Fomentar las condiciones necesarias para que los periodistas y los ciudadanos puedan expresarse libremente sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones.** Para ello es necesario eliminar las prácticas que conducen al sistema judicial a silenciar las voces críticas de la sociedad, así como revisar la legislación nacional para eliminar los delitos de vilipendio, difamación e injuria, que buscan censurar las denuncias de corrupción, crisis sociopolítica, criminalidad y violencia realizadas por periodistas y ciudadanos.



Universal Periodic Review Report, Venezuela 2016

Freedom of expression in Venezuela

Press and Society Institute of Venezuela (IPYS Venezuela)

40. With fourteen years of work, the Press and Society Institute of Venezuela (IPYS VENEZUELA, for its acronym in Spanish) has become a national and international benchmark reference in promoting the independent, plural and quality exercise of journalism

in the country. Our work, based on national and international standards, is especially geared towards the monitoring and research of the freedom of expression and the right to information in Venezuela. This work is based on systematic monitoring of 17 regions, which is carried out through a network of correspondents, and covers 71% of the national territory. In Venezuela, this organization is part of the coalitions Sinergia¹⁹ and Proacceso²⁰ —alliances engaged in the strengthening of the civil society and in the defense of the right to access public information, respectively. We are also a member of IFEX (International Freedom of Expression Exchange), which is a global network of 90 organizations²¹. On this platform, we are currently part of the coordination team of Latin America.

Summary

41. Venezuela rests on solid constitutional principles regarding freedom of expression. However, the study carried out by IPYS shows that in the last four years the fundamental guarantees for the exercise of the freedom of expression, the right to freedom of opinion and to access public information have been deteriorated.
42. The 2012-2015 period has presented the highest historic records of violations, with an increase of the attacks, assaults, censorship measures, concealment of official figures, and of the authorities' abuse of power to restrict the right to information. These difficult conditions could have been avoided if Venezuela had accepted and implemented the observations that it received during the first round of the Universal Periodic Review in 2011 and 2012.
43. Therefore we believe it is necessary that the Venezuelan State channels its efforts to: 1) honor and respect the obligations regarding the freedom of expression and the access to public information assumed by the Venezuelan State; 2) encourage and accept an official visit to Venezuela of special rapporteurs on freedom of expression, the right to privacy and on the situation of human rights defenders; 3) establish a national protection program for journalists; 4) promote a public policy, in which Internet as a human right for all citizens is guaranteed; 5) establish clear and efficient mechanisms to guarantee the access to public information in both state and non-state institutions; 6) guarantee the autonomy and independence of the authority in charge of establishing and implementing the public policies regarding telecommunications in the country.

General Assessment

44. Within the framework of the UPR Venezuela 2016, IPYS Venezuela presents an assessment of the situation of freedom of expression and of the right to information, from the perspective of journalism in the country, encompassing the years 2012 and 2015. This report it is based on a continuous monitoring, the systematization of historical data and on the thorough research that this organization has carried out over this period. As part of the monitoring, IPYS Venezuela created a special record which is based on the cases registered during this period and on the variables corresponding to the recommendations that were made at the UPR Venezuela 2011 and were rejected by the Venezuelan state.
45. The country guarantees the freedom of expression and the right to information in the National Constitution. These guarantees are consistent with the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, signed and ratified by Venezuela. However, these guarantees have been deteriorating. Gag orders and the abuse of state authorities have been imposed to restrict a process of free, plural and independent communication, as a necessary mechanism for strengthening democracy.

¹⁹ Go to: <http://sinergia.org.ve/>

²⁰ Go to: <http://proacceso.org.ve/>

²¹ Go to <http://www.ifex.org/>

46. Between January 1st, 2012 and December 31st, 2015, IPYS Venezuela registered 1,210 cases, involving 2,032 violations of the freedom of expression and of access to public information. These restrictions are not random, since they coincide with the 13 recommendations Venezuela received from different countries within the framework of the Universal Periodic Review presented in 2011. These recommendations were rejected or deferred by the State at that time²². In addition, the commitments in this matter, which Venezuela assumed in 2015 during the evaluations that it presented to the Human Rights Committee²³ and Committee on Economic, Social and Cultural Rights²⁴, have not been honored.
47. These trends are also part of the systematization of the research categories, with which this organization works²⁵. During this period, the most frequent cases were attacks against journalists and against media outlets, which summed up 844 (42%) violations. 505 (25%) abuses of state power in communication were also registered, as well as 304 (15%) restrictions to access public information, and 191 cases (9%) of censorship. These silencing actions came from the public authorities, the *de facto* groups operating outside the law, and the media themselves.
48. The legal and judicial framework was used in 185 opportunities (9%) to condemn and threaten journalists, media outlets, human rights defenders and citizens for exercising freedom of expression and the right to information. There were 3 cases of impunity, in which high state authorities justified the violations of freedom of expression, as well as the discretionary action on a judicial and police level, which validated the violent actions against journalists and media.
49. During this period, the conflicts regarding freedom of expression were spread, with greater or less intensity, throughout the national territory. There were 70 actions that affected the spectrum of Internet and others had national scope.
50. The cases of violations of freedom of expression were predominant in the main states, which have a higher population number, a high urban concentration and a diverse ecosystem of media, in terms of their platforms: press, radio, television and electronic media.
51. According to data from IPYS Venezuela, 44% of cases — that is to say, 552 of the 1,210 incidents — occurred in the metropolitan area of Caracas, the capital. In this jurisdiction the regional and local governments represent the political poles of the government and the opposition. This region was followed by states: Barinas (70 cases); Zulia (62); Bolivar (58), Carabobo (52); Tachira (51); Aragua (49); and Monagas (46)²⁶. Precisely, these 7 regions are ruled by members of the United Socialist Party of Venezuela, currently in the government; and at least 4 of these entities are managed by elected officials who had military training²⁷. In 2015, in some municipalities of the states Zulia and Tachira the state of emergency was established, which restricted the fundamental rights of the citizens of these border areas, adjacent to Colombia and Brazil. Somehow, this situation raised the risks for the exercise of journalism and accentuated the conditions of censorship and self-censorship in these three regions.
52. Between 2012 and 2015, the months in which the most of violations of freedom of expression were registered coincided with national electoral processes and socio-political demonstrations that spread in different states of the country. At this moment there were risks and threats against journalists and the media, mainly because of the media coverage of streets.

²² The 13 recommendations regarding freedom of expression, that Venezuela received and deferred, were made by: Australia, Germany, Canada, France, Slovakia, Slovenian, Indonesia, Israel, Norway and Switzerland. A/HRC/19/12/Párr.96.1; 95.15; 96.3; 96.4;96.5; 96.8; 96.27; 96.28; 96.29; 96.30; 96.31; 96.32.

²³ CCPR/C/VEN/CO/4/Párr.19 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fVEN%2fCO%2f4&Lang=es

²⁴ CESCR/C/VEN/CO/3/Párr.13;31 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fVEN%2fCO%2f3&Lang=es

²⁵ Go to: www.ipysvenezuela.org

²⁶ The evaluated period, 2012-2015, precisely corresponds to the greatest period of administration of the regional governments, which were elected in December 2012.

²⁷ The governors with military training and members of the United Socialist Party of Venezuela are: Francisco Rangel Gómez (Bolivar); José Gregorio Vielma Mora (Tachira); Francisco Arias Cárdenas (Zulia); y Francisco Ameliach (Carabobo).

53. The violations of freedom of expression intensified in: October 2012, when Hugo Chávez won the presidency; in April 2013, when Nicolás Maduro was elected President Nicola and when politically motivated demonstrations occurred; in February 2014, when demonstrations for socio-political reasons were registered in different states; and in June and December 2015, when the internal elections of the ruling party and the parliamentary elections were held, in which the opposition received a qualified majority in the National Assembly²⁸.
54. According to this record, the state actors had a direct responsibility in at least 68% of the 1,210 cases registered between 2012 and 2015. In these cases, there was a discretionary action, in breach of international obligations on freedom of expression, mainly from the authorities of the national, regional and local government of various political tendencies. The State security bodies were identified as main culprits. The most common practices were arbitrary arrests, monitoring and police surveillance, and arbitrary interceptions of private communications. Among the main perpetrators in this period, representatives of ministries, executive agencies, governorates, the Presidency of the Republic, and representatives of the national legislature can also be mentioned.
55. IPYS Venezuela registered that the most frequent violations of freedom of expression were aimed at reportorial teams during street coverage. The most affected were the reporters, photographers and cameramen. This occurred in the absence of a national policy and program of protection for journalists that ensures the protection of journalists during their work time.

Criminalization of the human rights activists

56. Furthermore, human rights activists were harassed and their physical integrity attacked. Just as it happened with journalists and media representatives, threats, arbitrary arrests and harassment actions against human rights defenders were registered over these 48 months. The most frequent violations against this sector were the campaigns of criminalization, which intensified between 2014 and 2015. Following this pattern, there were offensive statements made by public authorities and the systematic use of state media outlets for these purposes. One of the most used spaces for these purposes was the TV show "*Con el mazo dando*", hosted by Diosdado Cabello, former president of the National Assembly and current member of the parliament. Cabello has been practicing criminalization since February 2014 through the reports of "cooperating fellow countrymen", who through surveillance and police monitoring, violate the privacy and reputation of journalists, political leaders and human rights activists. To this end, he has used the resources and areas of Venezolana de Televisión, the main TV network of the Venezuelan State.
57. This deputy, as well as senior government officials — among whom the President of the Republic is also to be counted — have used the radio spectrum to criminalize representatives of other sectors of the society. One of the most affected have been the businessmen and party leaders, who have been accused, on a discretionary basis, of being responsible for the "economic war" and for the food and health crisis in the country. This situation has resulted in the harassment of the sources of information, because official pressure has been exerted on them after making declarations on national and international media. This creates a situation of self-censorship not only on journalists but also on the citizens who act as spokespersons for various sectors of the society. IPYS Venezuela registered between 2014 and 2015 at least 6 arrests of citizens of the business sector for declaring to the media.

Sentences for libel and slander

²⁸ See Attachment 2

58. Administrative and judicial proceedings were frequent when the State took action against the freedom of expression between the years 2013 and 2015, precisely during the presidency of Nicolás Maduro. At this time, investigations carried out by the tax entities or by the regulatory entity of telecommunications²⁹; as well as proceedings in courts were used as a mechanism of harassment and to silence the critical voices of journalism.
59. At this time, IPYS Venezuela documented 25 legal proceedings for motives regarding information and opinion. These facts are contrary to the international standards of protection of freedom of expression and the provisions of the Constitution. At least 13 of them were lawsuits for libel and slander³⁰.
60. One of the lawsuits for these crimes was introduced and accepted by the regional court in 2013. On March 10th, 2016, through a trial that lasted 20 hours and ended at dawn, was sentenced David Natera, director of Correo del Caroní — a private newspaper with a critical editorial line of the Bolívar state. The sentence implies 4 years in prison, the prohibition on leaving the country and a system of monthly reporting to the courts. This sentence came after conducting a journalistic research about the corruption case in Ferrominera Orinoco, one of the main basic major industries of the country³¹. This media outlet was sanctioned with an economic sanction and a civil lawsuit could be pursued, which can lead this media outlet to bankruptcy if accepted by the Venezuelan justice.
61. Another emblematic case was the private complaint filed in April 2015 by Diosdado Cabello against 22 leaders and members of the editorial boards of the newspapers El Nacional and Tal Cual, and the website La Patilla. This happened because of the publishing of an article a journalist from ABC Spain wrote, in which information from international research that could link Diosdado Cabello with drug trafficking³² was mentioned.
62. Between 2002 and 2015, IPYS Venezuela registered a total of 29 legal proceedings for slander and libel that have affected 39 people, and have been carried out mostly by representatives of public authorities

Biased Referee.

63. During this period, five radio stations went off the air by order of the government, and because of the arbitrary application of provisions of national law on telecommunications. These coercive measures were constant between 2012 and 2015, when IPYS Venezuela registered 31 administrative proceedings affecting the freedom and independence of private and community electronic media, such as websites, Internet providers and paid TV. These proceedings were initiated in a so discretionary manner by the National Telecommunications Commission (Conatel, for its acronym in Spanish). These have been investigations into alleged technical and content crimes³³ that result in pressures that have the effect of an inhibitor for the media, journalists and providers, who, given the threats, prefer to avoid disseminating information in a relevant and timely manner on the facts they are of public interest, for fear of being sanctioned by government bodies of the country's telecommunications.
64. An emblematic case of irregular management of operating licenses and the allocation of concessions, a process that is centralized in the government, is the case of Radio Caracas Television (RCTV, for its acronym in Spanish), one of the main TV channels of open signal that went off the air in 2007 by order of the former president Hugo Chávez, and was validated by the decision of Conatel and the Venezuelan justice system. The

²⁹ Describe Conatel's procedures.

³⁰ The crimes for libel and slander are established in the Organic Code for Criminal Procedures and the Venezuelan Criminal code.

³¹ Go to: <http://ipysvenezuela.org/alerta/bolivar-la-censura-tiene-un-aval-judicial-en-la-sentencia-contra-el-correo-del-caroni/>

³² Go to: <http://ipysvenezuela.org/wp-content/uploads/2015/10/MD-El-aparato-judicial-castiga-las-denuncias-de-corrupcion.pdf>

³³ Inquiries to media and the excessive controls reported by the Venezuelan State to the Human Rights Committee violate the provisions of freedom of expression established by the International Covenant on Civil and Political Rights. See: Paragraphs 245 and 251, Responses to the State Human Rights Committee. Paragraph 244. List of issues concerning the fourth periodic report of the Bolivarian Republic of Venezuela. United Nations Human Rights Committee.

Inter-American Court of Human Rights issued a ruling in 2015 on this case and ordered the Venezuelan state to repair the financial damage and equipment as well as open a bidding process on an equal basis to assign in a transparent manner the concession to operate the channel signal 2. However, this measure has been ignored by the government and the Supreme Tribunal of Justice stated that this binding ruling was "unenforceable"³⁴.

State Monopoly

65. Other pressures that have affected freedom of expression are related to the precarious conditions for the purchase of supplies for the newsprint and printing products. Media outlets with different trends in its editorial line have gone through this situation: critical, balanced and pro-government. At least 45 media outlets of 10 states have had difficulties of this sort and have limited their information work between August 2013 and March 2016. This has resulted in the termination of operations of some of them. At least 17 media outlets have gone out of circulation temporarily or permanently by this situation. In March 2016 — date in which this report is written — 10 media outlets are out of circulation. This situation resulted from the intensification of exchange controls imposed by the government to import newsprint and the subsequent consolidation of a state monopoly through the Complejo Editorial Alfredo Maneiro, corporation that depends on the central government, and is the only instance authorized for import, distribution and sale of this raw material in the country. This has happened despite of the fact that the Constitution prohibits consolidation of monopolies and international standards of freedom of expression reject these practices of limiting the right to information³⁵.

Recommendations

66. We, in IPYS Venezuela, consider that the observations that Venezuela received within the framework of the first round of Universal Periodic Review remain urgent for Venezuela. Therefore, we insist that they be reconsidered and accepted by the Venezuelan State.
67. From the results of the above assessment, we propose 11 recommendations that we believe are imminent to ensure and promote the respect for the freedom of expression as a fundamental condition for democracy. The implementation of these suggestions could be essential to ensure civil liberties in Venezuela, in the next four years.
68. **1.-Honor and respect the obligations assumed by the Venezuelan State on freedom of expression and access to public information.** Enforcing the principles established in the International Covenant on Civil and Political Rights and the commitments made before the Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
69. **2.-Encourage and accept the official visit to Venezuela of rapporteurs on freedom of expression, the right to privacy and the situation of human rights defenders** in order to assess the situation of freedom of expression and the conditions for the exercise of human rights.
70. **3.-Establish a public policy oriented to ensure, at its best, the plurality and diversity of information for both the media and journalists.** It is urgent to safeguard the right of citizens to be informed in a relevant, appropriate and timely manner, so they can make responsible decisions that promote democracy.
71. **4.-Establish a national protection program for journalists, in order to combat the culture of impunity in cases of violations of freedom of expression, the right to information and freedom of opinion and dissent.**

³⁴ Go to: <http://ipysvenezuela.org/alerta/nacional-tsj-declaro-inejecutable-fallo-de-la-corte-idh-sobre-caso-rctv/>

³⁵ <http://ipysvenezuela.org/alerta/carabobo-crisis-de-papel-acaba-con-82-anos-de-historias-impresas/>

It is necessary for the State to generate plans and programs to prevent and manage attacks against journalists and human rights defenders and regulate the excessive use of force on peaceful demonstrations that endangers the lives and safety of journalists and infocitizens.

72. **5.-Create a training and monitoring program for the work of public officials to maintain and promote a discourse of respect and promotion of freedom of expression.** It is essential to eradicate violent speech that has prevailed in Venezuela and to prohibit the offensive statements and the promotion of the hate speech by public officials that endanger the work of journalists and human rights activists.
73. **6.-Promote a public policy in which Internet is guaranteed as a human right for all citizens.** This guarantee can establish a fundamental mechanism for safeguarding and exigency of other fundamental principles, as well as for strengthening new technologies, education and culture.
74. **7.-. Establish the efficient and necessary justice mechanisms to sanction the cases of retaliation for dissent, and the attacks on human rights defenders and journalists.** It is therefore necessary to prohibit the use of excessive force in peaceful demonstrations, abuse of force by non-state actors that threaten the informative work of journalists and citizens
75. **8.-. Establish clear and efficient mechanisms to ensure access to public information in both state and non-state institutions.** It is essential the adoption of an Organic Law on Access to Public Information, as well as the creation of an autonomous institute that is responsible for establishing the necessary conditions for citizens to have the right to know about all matters of public interest.
76. **9.-Guarantee the autonomy and independence of the authority responsible for establishing and implementing public policies of the telecommunications in the country.** This will guarantee freedom and equal conditions for all broadcast media, and thus prohibit the actions that lead to censorship
77. **10.-Establish a public policy that guarantees the optimum conditions for the granting of frequencies in telecommunications, in a transparent and independent manner.** It is therefore necessary to establish fair governmental and judicial mechanisms that promote open, independent and transparent procedures for the permits needed by broadcast media, without discrimination of their editorial lines.
78. **Promote the necessary conditions for journalists and citizens to express themselves freely without any risks, threats and pressures.** This requires eliminating practices that lead to the judicial system to silence critical voices of society, and to review national legislation in order to eliminate the crimes of vilification, slander and libel, aimed at censoring the allegations of corruption, social and political crisis, crime and violence carried out by journalists and citizens.